



Rina Weltner-Puig

Rina Weltner-Puig

Doctoranda en Relaciones Internacionales por la Universitat Autònoma de Barcelona

Cuando el Partido Popular tomó las riendas del gobierno español por primera vez en 1996, España era un país muy activo en la política mediterránea europea, incluso respecto al conflicto de Oriente Medio. En el periodo socialista, España se había distanciado de la anterior política pro-árabe - diseñada para aliviar el aislamiento internacional del país durante la dictadura de Franco - y la falta de relaciones diplomáticas con Israel que se creía que esta política exigía. La normalización de sus relaciones exteriores que acompañó la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) y a la OTAN había requerido una relación equilibrada con todos los países involucrados en el conflicto y una que se encajara en el marco de la Declaración de Venecia por los países de la CEE y las resoluciones de la ONU. En 1986, por lo tanto, España reconoció Israel y, un año después, empezó la cooperación bilateral entre España y los territorios palestinos.

La política hacia Oriente Medio de los gobiernos socialistas no se limitó a establecer una paridad justa entre las diferentes partes del conflicto. También pretendió poner al servicio de la paz la nueva relación diplomática con Israel y los tradicionalmente buenos lazos con varios países árabes y con la Organización para la Liberación de Palestina. Una paz justa y duradera entre Israel y sus vecinos árabes se había convertido en una necesidad tanto para España como para los otros países de la CEE que, después de la crisis del petróleo, se habían empezado a enfocar en los desafíos de la región mediterránea.

La primera presidencia española de la CEE en 1989 ilustró que España podría jugar un papel global en el Mediterráneo y hacer de puente entre sus diferentes países. En Oriente Medio, España reaccionó activamente a la cambiante dinámica del conflicto, provocada por el primer levantamiento popular palestino. Consecuentemente, la Declaración de Madrid estableció las nuevas bases de la posición europea en el conflicto. Por iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Fernández Ordóñez, la dirección colectiva de la UE - o la *troika* - empezó a visitar la región. Después de la guerra del Golfo de 1991, Madrid organizó la conferencia que inició el proceso de paz de Oriente Medio.

Durante los siguientes años, los EE.UU. se convirtieron en el mediador principal entre las partes. Esta circunstancia asignó un papel principalmente económico a la Unión Europea (UE) que asumió también un papel activo en la cooperación multilateral. Gradualmente, la UE se convirtió en el patrocinador principal de la Autoridad Palestina (AP). Dentro de la UE, España continuó promoviendo una orientación global hacia el Mediterráneo y, en 1995, la UE lanzó el Partenariado Euro-Mediterráneo que reúne los países de la UE y 12 estados mediterráneos del sur. Un año antes, Jordania e Israel habían firmado el acuerdo de paz, y las negociaciones entre Siria e Israel estaban en marcha.

Si las perspectivas de paz en Oriente Medio habían favorecido la política mediterránea global de los gobiernos socialistas, la llegada al poder del Partido Popular coincidió con un retroceso y estancamiento en el proceso de paz. Por consiguiente, la visibilidad de España disminuyó aunque el nuevo gobierno reafirmó su compromiso con el Mediterráneo como uno de los escenarios naturales de la política exterior del país. El hecho de que el Presidente Aznar, el Ministro de Asuntos Exteriores Piqué, el Rey, así como los líderes de la oposición recibieran a Yasser Arafat durante su visita a España en 1996 ilustró la simpatía especial que la AP y los palestinos todavía disfrutaban en España, siempre que ésta no pusiera en peligro las

relaciones cordiales con Israel. En el mismo año, el diplomático español y especialista en Oriente Medio del periodo socialista, Miguel Ángel Moratinos, era designado como Enviado Especial de la UE para el Proceso de Paz de Oriente Medio.

En los años siguientes, el perfil bajo y la falta de nuevas iniciativas políticas caracterizó la política española hacia el Oriente Medio. Indiscutiblemente, las crecientes dificultades en el proceso de paz contribuyeron a ello. En 1998, en un viaje a Egipto, los Territorios Palestinos e Israel, Aznar reafirmó los cuatro pilares de la política española de Oriente Medio: las resoluciones de la ONU, los acuerdos de paz, la integridad territorial y la seguridad de los dos estados, y los derechos de los palestinos. Aznar también expresó su apoyo a los esfuerzos de mediación de los EE.UU. y reiteró la oferta de organizar una segunda conferencia de paz.

Mientras la visibilidad de la política nacional de España hacia Oriente Medio disminuía, el papel de la UE aumentó. A través de la figura del Enviado Especial, la UE consolidó su posición en el área. La creación del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común y el nombramiento de Javier Solana al cargo fortalecieron la UE como un actor unificado en Oriente Medio. En el curso de los años, el apoyo de la UE a la AP y el pueblo palestino han intensificado, e Israel se ha beneficiado de un trato preferencial en su comercio con la UE.

El desenlace de una serie de negociaciones de paz en 2000-2001 sin acuerdo y los posteriores cambios en los gobiernos de Israel y EE.UU. fueron seguidos por una nueva oleada de violencia bajo el nombre del segundo levantamiento palestino o Intifada de al-Aqsa. El cada vez más evidente fracaso del proceso de paz, ensombrecido por los ataques suicidas por parte de activistas palestinos y por la represión militar israelí, activó la diplomacia europea. Entre otros dirigentes, Aznar viajó a la región en 2001. Los frutos de su viaje fueron escasos aunque, en noviembre, los esfuerzos españoles contribuyeron a una breve reunión entre Arafat y Peres en el Foro Formentor. En el mismo año, como señal de las buenas y cordiales relaciones diplomáticas, el nuevo presidente de Siria, Bachar al-Asad, escogió España como su primera visita a Europa.

Cuando España asumió la presidencia de la UE en enero de 2002, el gobierno tenía dos objetivos respecto a Oriente Medio. Primero, aumentar los esfuerzos para atajar la violencia inaudita que se había desencadenado en la región para reabrir la perspectiva de una solución política al conflicto. La estabilidad y la seguridad en Oriente Medio se habían convertido en cuestiones esenciales también para la lucha contra el terrorismo. Segundo, España pretendió unir las posiciones de los EE.UU., la UE, la ONU, Rusia y los países árabes afectados por el conflicto.

En la práctica, los eventos pusieron a prueba la capacidad negociadora de la diplomacia española y europea. Ya a principios del mes de enero, España tuvo que enfrentarse a una situación incómoda cuando Israel descubrió una nave palestina cargada de armas iraníes. Mientras los EE.UU. e Israel atribuían la responsabilidad a la AP y a su líder, la UE permaneció en silencio hasta a finales de mes cuando pidió que la AP clarificara el caso.

Asimismo, cuando Israel, con el apoyo implícito de los EE.UU., inició sus acciones contra las infraestructuras palestinas y la AP, la UE en la persona de Josep Piqué expresó su apoyo a la AP y defendió a Yasser Arafat. Con Ariel Sharon, Piqué insistió en relanzar las negociaciones de paz. Estas posiciones se consolidaron en el curso de los siguientes meses. El empeoramiento del conflicto, sin embargo, probó la capacidad práctica de España de coordinar las posiciones dentro de la UE así como con los EE.UU. Una reunión entre Piqué y el secretario de estado Colin Powell en la cual ambos dieron la bienvenida al plan de paz de Arabia Saudí restableció el entendimiento trasatlántico. Del mismo modo, las relaciones entre la UE e Israel se deterioraron hasta tal punto que el gobierno de Israel no recibió a Piqué y Solana, ni les permitió encontrarse con Yasser Arafat, durante su visita a la región.

La incapacidad de los mediadores para detener la violencia dio paso a una nueva resolución de la ONU en la cual, por primera vez, se refirió a un estado Palestino independiente. Consecuentemente, las posiciones de la UE, los EE.UU., la ONU y Rusia empezaron a converger y, en abril, se creó el Cuarteto con el objetivo de coordinar los esfuerzos de paz.

Aunque su impacto inmediato fue menor, el Cuarteto se ha convertido en una pieza esencial de la diplomacia para la paz en Oriente Medio. Por otro lado, las diplomacias española y europea consiguieron resolver el problema de los activistas palestinos asediados por el ejército de Israel en la Basílica de la Natividad. A pesar de la iniciativa del Cuarteto de organizar una nueva conferencia de paz, la falta de apoyo de la administración Bush ha bloqueado la idea. De momento, la vacilación de los EE.UU. en si y cómo reiniciar las negociaciones y la violencia ocasional pero destructiva extienden su sombra de incertidumbre sobre el futuro del proceso.

Para concluir, el conflicto de Oriente Medio ilustra un área de la política exterior en la cual las políticas nacionales están dando paso a una posición común europea cuando ésta se consolida. Durante el periodo socialista, España contribuyó activamente en la formación de la política común, y los gobiernos del Partido Popular han hecho suyos los compromisos de sus predecesores. El protagonismo de su política hacia Oriente Medio, sin embargo, ha sido menor, excepto durante la presidencia de la UE cuando España demostró que podía reunir el Cuarteto. Junto a la diplomacia europea, España también hizo frente a unos acontecimientos excepcionalmente preocupantes. Parece cada vez más evidente que cualquier solución duradera al conflicto requiere un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional. Dentro de ella, España, independientemente del color político de su gobierno, está en posición de favorecer un entendimiento entre las diferentes partes del conflicto.